

Pacto de Ostende (1866).

Compromiso político firmado en la ciudad belga de Ostende, el 16 de agosto del año 1866, entre las filas progresistas y demócratas españolas, con la participación de 45 representantes de ambos partidos, tras el sonoro fracaso de la sublevación del Cuartel de San Gil (22 de junio del mismo año), encabezado por el general Prim, y la posterior represión montada por el presidente del Gobierno, el general Leopoldo O'Donnell, quien luego sería sustituido al frente del Gabinete por Ramón Narváez. En conjunto, en clara oposición a la reina Isabel II y a lo que ésta representaba, se agruparon bajo el nombre genérico de Pacto de Ostende casi todos los emigrados, militares y civiles que tuvieron que salir del país debido al Gobierno despótico de Narváez, refugiados en Londres, Ginebra, Bruselas y París, los cuales mantuvieron contacto con los desterrados en Canarias y con los que, detenidos o libres, pudieron comunicarse en la península; se llegó a una fórmula de entendimiento, más por puro oportunismo que por identidad de planteamientos, entre ambas formaciones para montar una conspiración en toda regla contra el régimen monárquico encarnado por la reina Isabel II. El principal promotor del acuerdo fue el general Juan Prim, apoyado sin reservas por prestigiosos políticos y militares, como Dulce, Serrano, Caballero de Rodas y Topete.

Objetivos del Pacto de Ostende

El Pacto de Ostende acordó, según constaba en el acta del acuerdo "destruir todo lo existente en las altas esferas del Poder", para ello se nombró en seguida una Asamblea constituyente, bajo la dirección de un Gobierno provisional, la cual decidiría la suerte del país y la forma de su Gobierno. Tal Asamblea debía ser elegida mediante sufragio universal directo y masculino. El Pacto, que no consideró otros apartados, fue la culminación de los varios intentos de aproximación llevados a cabo, un año antes, entre progresistas y demócratas, por lo que ambas formaciones acordaron reunir fondos para poner en marcha el movimiento revolucionario y crear un centro coordinador de actividades, establecido en Bruselas, presidido por Prim. Pero, frente al centro revolucionario de Bruselas surgió otro en París, controlado por los demócratas republicanos de Pi i Margall y Castelar, que puso en peligro y en evidencia lo pactado en Ostende y sacó a relucir las profundas diferencias, sobre todo doctrinarias y de forma de gobernar, que atenazaban a las dos facciones del partido demócrata español. Gracias a que ambas formaciones tenían como objetivo común y prioritario el compromiso contra el régimen constituido y derrocar a la reina Isabel II, a la larga ambos centros de oposición no tuvieron más remedio que unirse para robustecerse mutuamente en dicha empresa común.

La reacción gubernamental no se hizo esperar, se plasmó en una feroz e indiscriminada represión que no hizo más que acelerar el propio proceso de descomposición política del régimen isabelino y el paulatino aislamiento de la Corona.

Dos meses antes de su caída, O'Donnell se enteró de lo que se estaba fraguando en el exterior, por lo que intentó, sin éxito alguno, atraer a los progresistas con una nueva ley electoral más flexible. Por el contrario, tuvo que hacer frente al pronunciamiento de Prim (enero del año 1866) y al levantamiento del Cuartel de San Gil (junio del mismo año). Su posterior desacuerdo con la reina, condujo a un nuevo Gobierno de Narváez, el 10 de julio, que no sólo no consiguió acercar a los progresistas, sino que llevó al alejamiento de los unionistas del propio O'Donnell, a los que impidió manifestar el desacuerdo en las Cortes al proceder a la disolución de éstas; gobernó a partir de ese momento por medio de Reales Órdenes y Decretos Ley, y de una manera mucho más arbitraria y despótica que antes.

El Pacto de Bruselas y el fin de Isabel II.

La unión de las diversas tendencias políticas en el exilio, en el Pacto de Ostende (demócratas, demócratas-republicanos y progresistas), cobró carta de naturaleza en el Pacto de Bruselas, del 30 de junio del año 1867, al que poco después se unieron los unionistas defenestrados por Narváez, adhesión que fue propiciada por la propia conducta represiva de Narváez y de la reina, y, sobre todo, por la muerte de O'Donnell, acaecida el 4 de noviembre del año 1867, quien entregó el liderazgo a un general menos dispuesto a seguir manteniendo el trono de Isabel II: el general Serrano. Con su adhesión, la Unión Liberal se pasaba al campo antidinástico. Desde ese momento, el trono de Isabel II peligraba.

La pérdida progresiva del prestigio de la monarquía como institución se acentuó todavía más. Isabel II, con sus continuas arbitrariedades, airadas oportunamente por la oposición monárquica, se granjeó las antipatías de todo el pueblo y quedó sola con su camarilla cortesana, alejada de la clase política. El único apoyo con el que contaba se había reducido a algunos moderados. La muerte del propio Narváez, el 23 de abril del año 1868, acabó por privarla de su único apoyo institucional. El siguiente Gabinete, presidido por Luis González Bravo, tan sólo tuvo que esperar la caída definitiva del régimen monárquico borbónico, el 28 de septiembre de ese mismo año.